



Paula Gaviria

Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.



Francisco de Roux

Exdirector del Cinep, exprovincial de Colombia de la Compañía de Jesús, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.



Marcela Eslava

Profesora asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

¿Cuáles son las grandes necesidades de **gasto del posconflicto?**

La Revista Tribuna les entregó 100 pesos a tres expertos en construcción de paz, economía y políticas públicas para que los repartieran entre algunas de las necesidades de inversión más inminentes del posconflicto, enumeradas a continuación.

Con recursos escasos y grandes necesidades de gasto en el posconflicto, el Estado colombiano tendrá que tomar decisiones similares a las simuladas en este juego.



Servicios públicos rurales



Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica



Infraestructura de transporte regional



Fortalecimiento del sistema de justicia



Mecanismos de participación política



Acceso a la salud



Reparación a víctimas

PAULA GAVIRIA

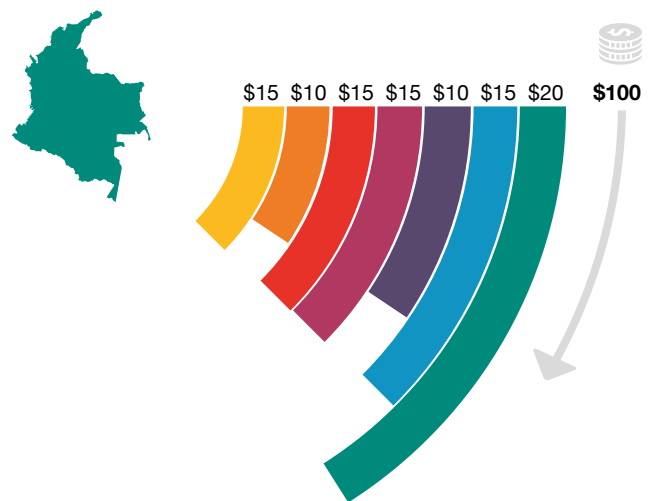
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.



-  Servicios públicos rurales
-  Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica
-  Infraestructura de transporte regional
-  Fortalecimiento del sistema de justicia
-  Mecanismos de participación política
-  Acceso a la salud
-  Reparación a víctimas

Estructurar las coordenadas del gasto para el posconflicto pasa por reconocer que el país tiene múltiples contextos en los que varía la presencia del Gobierno y su disposición institucional, y la situación de las poblaciones en los territorios. El mayor peso otorgado a la reparación a las víctimas se sustenta en el deber del Estado de satisfacer, de manera primordial, los derechos de estas de cara a la construcción de la paz. Además, la reparación colectiva permite reivindicar derechos constitucionales y adoptar medidas sociales que irradian y benefician a otros territorios y poblaciones. Es necesario simultáneamente fortalecer el sistema judicial, como garantía del derecho de las víctimas a la justicia y no repetición, necesario para reconstruir la confianza en el Estado. La inversión en el acceso a la salud, servicios públicos rurales e infraestructura de transporte regional resulta de la enorme necesidad de contar con justicia social, lo que implica promover el desarrollo integral de las regiones. La inversión se debe dirigir a garantizar, sobre todo a los territorios históricamente marginados, los mínimos vitales para el bienestar de las comunidades. Adicionalmente, es importante pensar en vigorizar la democracia, permitir la entrada y la participación efectiva de nuevos actores políticos y, por esa vía, permitirnos la transformación hacia una sociedad incluyente que reconoce su diversidad y multiculturalidad.

Para que esto sea posible el Gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia pueden coadyuvar e insistir en el trabajo conjunto para maximizar los esfuerzos hechos por cada uno. 🌐



Fotografía: cortesía de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.



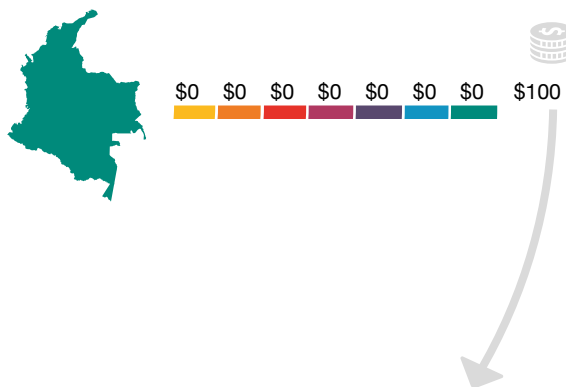
FRANCISCO DE ROUX

Exdirector del Cinep, exprovincial de Colombia de la Compañía de Jesús, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.



-  Servicios públicos rurales
-  Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica
-  Infraestructura de transporte regional
-  Fortalecimiento del sistema de justicia
-  Mecanismos de participación política
-  Acceso a la salud
-  Reparación a víctimas

No pude asignar los 100 pesos. En 15 años del Programa de Desarrollo y Paz regional aprendí que estas construcciones regionales, de posconflicto en este caso, son procesos interdisciplinarios que son más legítimos, sostenibles y gobernables en la medida en que sean más participativos. Es un error definir *ex ante* la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues, entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso; tampoco se puede definir *ex ante* cómo se va a repartir esa eventual cantidad de recursos. Es durante el proceso mismo que van surgiendo las necesidades que deben cubrirse para lograr una totalidad suficiente, y de esta manera se van demandando los recursos requeridos y se van ordenando las prioridades, pues unas iniciativas van jalonando a otras. Así, cuando un proyecto de este tipo es sostenible, tiene capacidades endógenas de generar excedentes, hacer inversiones pertinentes y conseguir aliados. En la experiencia del Magdalena Medio, se definió que para crear asociación la primera inversión sería en capacitación. Desde allí se pasó a invertir en la identidad regional a través de dinámicas culturales para entender el territorio como una unidad regional. A partir de esto se invirtió, simultáneamente, en proyectos educativos y en proyectos productivos de finca campesina. Estos últimos proyectos demandaron, a su vez, rutas terciarias, programas de crédito rural y organizaciones cooperativas, así como una expansión de la seguridad ciudadana. Este es solo un ejemplo que demuestra que un proceso social es posible si se tiene una base de recursos y un acompañamiento integral e interdisciplinar, por un tiempo suficientemente largo. ☺



“Ojalá a cada persona de la región se le ofreciera lo necesario para ser constructor de paz: oportunidades para estudiar, para profesionalizarse”

Alba Gelpud Narváz
 Docente de la institución educativa José Asunción Silva y miembro del Comité de Impulso de la Inspección de El Placer, Putumayo.
 ver charla



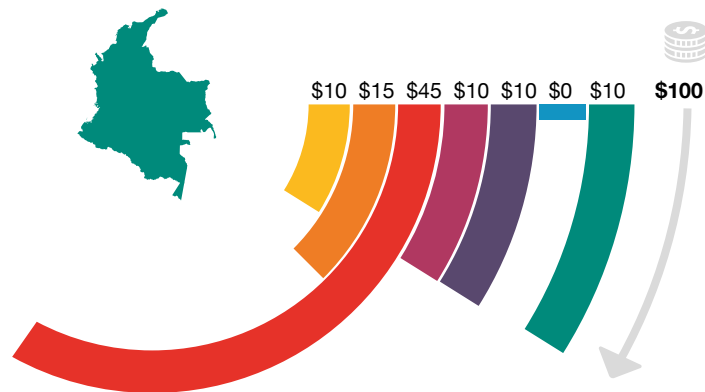
MARCELA ESLAVA

Profesora asociada, Facultad de Economía,
Universidad de los Andes.



-  Servicios públicos rurales
-  Crédito para productividad agrícola y asistencia técnica
-  Infraestructura de transporte regional
-  Fortalecimiento del sistema de justicia
-  Mecanismos de participación política
-  Acceso a la salud
-  Reparación a víctimas

Suponiendo que estos son los 100 pesos con destinación específica a temas de posconflicto, las dos grandes prioridades serían: 1) generar condiciones para que en las regiones y sectores más golpeados por el conflicto haya oportunidades de vida satisfactorias alternativas a la guerra, y 2) sanar las heridas del conflicto previo. La primera de esas prioridades exige que esas regiones y sectores, tradicionalmente aisladas y con frecuencia de vocación rural, puedan acceder a los beneficios del desarrollo. La infraestructura de transporte regional y el apoyo productivo, así como el acceso a servicios públicos, son fundamentales. Y entre ellos, la infraestructura de transporte regional es la que demanda más recursos, y potencialmente la que mayores beneficios trae, pues se convierte en una posibilitadora del emprendimiento privado. Por su parte, la segunda de estas prioridades descansa sobre la justicia y la reparación. Aunque el acceso a salud es importante para todos los ciudadanos, está cubierto por otras esferas de la política pública; yo no le dedicaría recursos específicos del llamado posconflicto. 🇨🇴



Fotografía: cortesía de Marcela Eslava.

[nuestros proyectos]

Universidad de los Andes
Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo

Índice de Progreso Social en diez ciudades de Colombia

Más allá de las medidas de progreso económico, las ciudades y países han entendido la necesidad de medir el bienestar humano. Aspectos como nutrición y asistencia médica, acceso a información, sostenibilidad del ecosistema, libertades personales y acceso a educación superior son los que determinan qué tan alto es el Índice de Progreso Social (IPS) en una sociedad. Este proyecto pone en práctica la metodología internacional del IPS en diez ciudades de Colombia para medir su desempeño entre 2009 y 2014, identificar fortalezas y debilidades en ellas y guiar las futuras agendas hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.

Investigador principal: Darío Maldonado, Escuela de Gobierno.
Entidad financiadora: Fundación Corona.